



MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL MENDAVIA DECIDE, RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO OPUESTO AL TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIONES (TTIP) (31-MARZO-2016)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés), también conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad. Desde entonces, UE y EEUU están negociando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación, del medioambiente, nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general.

Esta “mayor liberalización de las relaciones comerciales EE.UU-UE”, tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es decir de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera, y bajo este principio, se pondría fin al “Principio de precaución” vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos.

Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto, casi nula transparencia y sin ningún control por parte de organismos públicos que representan a la ciudadanía.

El TTIP, tiene entre sus objetivos la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, lo que pone en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas, en todos los niveles, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas locales. Pero, sobre todo, el TTIP, ignora cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones. Al introducir la cláusula ISDS de solución de controversias inversionistas– Estado, permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos (local, regional, estatal) ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que estimen de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las





Administraciones Públicas para aplicar leyes en las áreas de salud pública, de medioambiente y protección social.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación nacional, regional o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.

La aprobación del TTIP contribuiría, en el caso de España, a la planificada ofensiva del neoliberalismo conservador del gobierno español de desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local el gobierno de la nación pretende tres objetivos básicos:

- Restringir la democracia y autonomía local.
- La supresión de competencias y servicios públicos locales
- La total privatización de los servicios municipales.

La irracionalidad y la insostenibilidad de esos objetivos están provocando consecuencias muy negativas para la mayoría de la población. Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, así como a las corporaciones locales y comunidades autónomas del territorio español, para que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.

EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el estado, una Comisión de Arbitraje será quien se encargue de resolverlos, la denominada "Investor-to-State Dispute Settlement" (ISDS). Este órgano tendría competencias para establecer compensaciones económicas de los Estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (tales como el aumento en estándares de la protección del medio ambiente) o que reduzcan los beneficios futuros que una compañía conciba que debería obtener. El Estado en este caso puede recurrir judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas. Aunque las reglas de organismos similares al ISDS son bastante comunes en los acuerdos de libre comercio entre los EEUU o la UE con los países emergentes con objeto de garantizar cierta previsibilidad de las decisiones legales, éstas no son necesarias en países con sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos. Así mismo, a la ciudadanía le interesa que los servicios públicos sean eficientes para asegurar una buena calidad de





vida. El tratado de Lisboa concede a los Estados. Miembros de la UE la competencia para definir y organizar los servicios del interés general. Por lo tanto la terminología del acuerdo tiene que ser la misma de los tratados de la UE, especialmente el Tratado de Lisboa, ya que éste desempeña un papel esencial respecto a los “servicios de interés general”. Por ello resulta inadecuado el término “utilidades públicas”, utilizado en la terminología del acuerdo.

Los servicios públicos continúan evolucionando con los cambios políticos, tecnológicos y sociales. En contraste con ello, los acuerdos comerciales implican a menudo el riesgo de restringir las políticas públicas con “cláusulas freno”, especialmente en el campo de los servicios públicos.

En lo que se refiere a la contratación pública, el objetivo que se pretende con el TTIP es mantener el Acuerdo de Contratación Pública (GPA) de la Organización Mundial del Comercio (WTO) hasta crear un nuevo acuerdo mejorado. El GPA está siendo utilizado por la Comisión de la UE como justificación para reducir las garantías en la ley de la contratación pública.

Cualquier clase de acuerdo, incluyendo la contratación pública debe conducir a aumentar las garantías y no a reducirlas. Ese acuerdo no debe a su vez poner en peligro los aspectos progresivos de la ley de contratación pública de la UE, especialmente los que facilitan el desarrollo regional y local. Estos aspectos son importantes ya que permiten que se realicen las contrataciones públicas teniendo no solo en cuenta el precio sino también otros aspectos como los medioambientales y los sociales. El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación nacional, regional o local, de tal forma que las corporaciones locales se encuentran totalmente sometidas a este tipo de ajustes estructurales restrictivos, debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, haciendo imposible la promoción de políticas de fomento de la actividad económica y del empleo local. Las ciudades y los municipios reconocen la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía.

Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, los





aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU.

Las Administraciones Locales:

- Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.
- Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.
- Están obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y ambientales y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP aplicando imponiendo prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos no testados científicamente; la aceptación de alimentos modificados genéticamente, el consumo de carne de ternera y de cerdo tratado con hormonas, el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio del "fracking". Las entidades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este Tratado y la suerte que correrán los servicios y compras públicos.

Por lo anteriormente expuesto quieren poner de manifiesto que:

- El comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas en todo lugar, y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales.
- La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia.
- La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste económico y ecológico.
- Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado.
- Sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia.
- El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.





¿CÓMO AFECTARÍA A MENDAVIA ESTE TRATADO?

La Unión Europea, con una población de 508 millones de habitantes y una superficie de menos de 4,5 millones de km², cuenta con unos 13 millones de unidades de explotación agraria o “granjas”. Estados Unidos, con una población de 316 millones de habitantes y 9,83 millones de km², cuenta con unos 2 millones de unidades de explotación agraria o “granjas”. En comparación con las grandes corporaciones de agroindustria norteamericanas, todos los agricultores y empresas agrícolas o agroindustriales de Mendavia son pequeños agricultores y pequeñas empresas: ninguna se podría siquiera catalogar como “media” en comparación con las corporaciones norteamericanas.

El Tratado del TTIP afectaría enormemente a Mendavia, y pondremos solo unos pocos ejemplos:

1º. Gestión del agua. En primer lugar, los usos y disfrutes y derechos adquiridos sobre el agua quedarían en entredicho, puesto que, al ser el TTIP un tratado internacional, tiene rango superior de ley, prevaleciendo sobre la legislación estatal, foral y local; dado que el tratado pretende privatizar la gestión de los recursos hídricos, se podría ver como la actual gestión del agua, en manos de Mancomunidades, Comunidades de Regantes o empresas públicas como la que gestiona el agua del Canal de Navarra se viesen sustituidas por corporaciones privadas. Es decir, el cuando regasen, y la cantidad de agua con que lo hiciese... y el precio al que regasen los agricultores de Mendavia lo podrían decidir unos señores sentados en la mesa del consejo de administración de una empresa de Boston.

2º. Denominaciones de origen. El 60% del Tratado ya está negociado; las denominaciones presentan un escollo y su negociación se ha dejado para el final. Las Denominaciones de Origen están en el punto de mira de las empresas estadounidenses, pues suponen una barrera de calidad frente a sus productos. El actual Gobierno Español ya trasladó en enero del año pasado a la Comisión Europea su temor por la desprotección de las denominaciones de origen en el borrador del Tratado. “A diferencia de Europa, USA no protege sus productos geográficos. No protege las indicaciones geográficas que proceden de la UE, en especial las que tienen que ver con productos alimentarios. USA lo que hace es permitir a sus productores utilizar nuestras denominaciones, y así se produce un comercio engañoso con los consumidores.”, tal y como señaló la propia Comisión Europea en una nota. Esa nota emitida fue insuficiente para España, pero también para otros países como Alemania, Francia e Italia, todos aliados debido a la gran variedad de indicaciones geográficas que albergan. Hay dos problemas con Estados Unidos: el primero, ya mencionado, que este país no protege geográficamente sus productos; Europa, en el lado opuesto, introdujo en 1992 tres categorías distintas para defender sus denominaciones de origen: la roja, que significa “denominación de origen controlada”; la “indicación geográfica protegida”, amarilla y azul; y una última conocida como “especialidades tradicionales garantizadas”. El segundo temor es que EEUU no solo no protege sus especificidades regionales, sino que “las figuras de calidad reconocidas en Europa allí no son más que marcas genéricas”, explican desde la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). “Allí es posible encontrar un Jerez de





California o un Oporto de Oregón, una práctica comercial abusiva contra la que venimos luchando desde hace mucho tiempo". Es decir, un producto selecto, localizado en una zona geográfica europea y elaborada a partir de una determinada técnica no es otra cosa que una mera marca comercial, una más, cuando llega a Estados Unidos. Desde esta organización consideran que "las Indicaciones Geográficas de la UE no pueden ser una moneda de cambio en el actual marco negociador". Este colectivo cree que el riesgo de armonizar las denominaciones de origen conllevaría "la pérdida de la especificidad de las regiones de la UE y de la calidad de sus productos". Y eso, según este órgano, supondría una "sangría de puestos de trabajo a nivel local y regional". Podría darse un caso como el de México. México, antaño el principal exportador de maíz del mundo, y cuna del cultivo de este producto, ha visto como, desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre USA, Canadá y México, ha pasado a ser un importador de maíz. Aquí nos podríamos ver como, siendo productores de vino Rioja, nuestro mercado se viene inundado del vino de California, en tanto que nuestros vinos verían reducida su capacidad comercializadora en el mercado norteamericano.

3º. Prácticas de las Corporaciones americanas. Pondremos el ejemplo que ocurrió en India, por si el de México no ha bastado. La India trató de modernizar su agricultura a finales del siglo pasado. Para ello eliminó los subsidios y suavizó la legislación, forzando la liberalización del mercado interno. La corporación Monsanto intervino entonces con sus semillas. La corporación ofreció sus semillas transgénicas a los agricultores hindúes prometiéndoles cosechas más abundantes. Pero los agricultores no sabían que esas semillas transgénicas tenían dos problemas: 1º, necesitaban más agua para producir más; y 2º, las plantas surgidas de esas semillas producían semillas estériles, es decir, semillas que no germinaban al siguiente año, por lo que no valían para plantar, por lo que para la cosecha siguiente debían comprar semillas de nuevo a Monsanto. En una agricultura atrasada como la hindú, con graves problemas de abastecimiento para el agua en época de sequía, y basada en parte en la venta del excedente agrícola que quedaba tras alimentarse y guardar semillas para la cosecha siguientes, eso supuso endeudamientos, pérdidas de cosechas, familias que fueron a la pobreza y la ruina, tanto que muchos agricultores terminaron suicidándose, tantos que a final la noticia saltó a los medios internacionales.

Caso similar al ocurrido en México. En México la producción de transgénicos está prohibida, pero no su compra. La Secretaría de Economía permite la importación de transgénicos, pero la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) prohíbe su producción. Es decir: no puedes hacer transgénicos, pero sí comprarlos al extranjero. Los transgénicos que el gobierno mexicano tiene permitido importar son principalmente el maíz, la soya, papa, tomate, algodón, alfalfa y canola. Los agricultores mexicanos comenzaron a importar esas semillas, y Monsanto oligopolizó la producción de semillas en México, controlando el 70% del mercado, que por lo tanto, pasó a depender de ellos. Y quien controla las semillas de un país, controla la alimentación, pues con la producción agrícola se alimenta la cabaña ganadera. Así, gran parte de la producción agrícola de un país de 80 millones de personas como México





quedó al albur de una compañía, compañía que ya se puede catalogar no de "multinacional", empresa que está en multitud de naciones, sino de empresa "transnacional", empresa que está más allá de las naciones.

Los agricultores nativos comenzaron una resistencia frente a ese poder que amenazaba directamente la soberanía alimentaria del país, y comenzaron la creación de bancos de semillas, dado que las semillas originales de maíz y frijoles prácticamente habían desaparecido. Para quienes quieran profundizar en el tema, les dejamos un enlace a un extenso reportaje en donde se explica lo ocurrido en México.

http://www.vice.com/es_mx/read/la-semilla-roja-asi-funciona-monsanto-en-mexico

Imaginemos que lo ocurrido en la India con el arroz y en México con el maíz y los frijoles (lo que nosotros llamamos alubias o pochas) ocurre con las semillas de los pimientos que se producen en Mendavia.

Por todo ello proponemos el siguiente ACUERDO:

1. Declarar a éste Municipio de Mendavia como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

2. Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas del Gobierno de la Nación su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

3. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos), con la finalidad de conseguir:

- Que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado.
- Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las ETN en la regulación.
- Que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales.
- Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales.
- Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.

4. Dar traslado de los acuerdos al Parlamento Europeo, Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Navarra.

